

Soberanía, poder y cuidados: el Gobierno enfrenta una prueba de control institucional

México vive una jornada donde la gobernabilidad se juega en tres niveles: la defensa de la soberanía frente al caso de El Mayo Zambada, el reacomodo político rumbo a 2027 y la presión sobre el IMSS por el futuro de cientos de guarderías subrogadas. La coyuntura obliga al Gobierno a demostrar algo más que narrativa: necesita control, pruebas y capacidad de respuesta.

El caso de Ismael El Mayo Zambada volvió al centro de la agenda nacional, pero ahora con una lectura política mucho más amplia.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la captura y traslado del capo a Estados Unidos pudo implicar una intervención de agencias estadounidenses en territorio mexicano. El punto no es menor: si se confirma que autoridades extranjeras operaron sin coordinación transparente con México, el tema deja de ser únicamente judicial y se convierte en un asunto de soberanía.

La mandataria anunció que presentará una cronología oficial para aclarar qué ocurrió, qué informó Estados Unidos en su momento y qué elementos contradicen hoy esa versión.

La línea del Gobierno es clara: nadie defiende a Zambada, pero sí se debe defender el principio de que ningún país puede actuar unilateralmente en territorio mexicano. Dicho sin rodeos: combatir al crimen no autoriza brincar la frontera institucional.

El asunto también tiene impacto político interno. Sinaloa vuelve a estar bajo reflectores, junto con figuras locales señaladas en distintos medios. Para Morena, el caso representa un riesgo reputacional porque mezcla seguridad, soberanía, crimen organizado y responsabilidades políticas estatales.

En el terreno partidista, el oficialismo conserva ventaja, pero ya enfrenta zonas de turbulencia. Morena avanza hacia 2027 con fuerza territorial, aunque con demasiados frentes abiertos: candidaturas, disputas internas, expedientes estatales y posibles aliados satélite.

Del otro lado, la oposición sigue buscando cómo reorganizarse. El PRI atraviesa uno de sus momentos más débiles: perdió peso en San Lázaro y por primera vez en décadas no encabezará la Cámara de Diputados durante la legislatura. El poder tricolor ya no se administra como antes; ahora pelea por sobrevivir con relevancia.

Mientras tanto, Que Siga la Democracia impugnó la negativa del INE para obtener registro como partido político nacional. Si el Tribunal Electoral revierte la decisión, el bloque cercano a la 4T podría sumar otra herramienta electoral rumbo a 2027.

El tercer frente está en el IMSS, y es quizá el más sensible para la vida cotidiana.

El sistema de guarderías subrogadas enfrenta una alerta mayor. Alrededor de 650 contratos vencen en diciembre y prestadores del servicio advierten que las cuotas pagadas por el Instituto ya no alcanzan para sostener la operación con los estándares exigidos.

El problema puede afectar a cerca de 80 mil niñas y niños, además de madres y padres trabajadores que dependen de ese servicio para mantener su vida laboral. También hay miles de empleos en riesgo dentro de las propias guarderías.

La paradoja es evidente: el Gobierno habla de construir un Sistema Nacional de Cuidados, pero una red ya existente podría debilitarse si no se corrigen las condiciones financieras y administrativas.

El IMSS necesita actuar antes de que el vencimiento contractual se convierta en crisis. No basta con supervisar; hay que garantizar continuidad, calidad y viabilidad. Porque en política pública, cerrar una guardería no sólo apaga un servicio: desordena familias completas.

La fotografía nacional es contundente. El Gobierno enfrenta presión externa por soberanía, presión interna por sucesión política y presión social por servicios de cuidado.

El desafío es convertir poder en respuesta. Porque la gobernabilidad no se mide en conferencias, sino en la capacidad de evitar que los problemas anunciados se conviertan en crisis.